

Santiago, cuatro de octubre de do mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que mediante presentación de fecha 25 de junio de 2024 comparece el señor Gonzalo Cangas Espinoza, abogado, en representación del Sindicato Independiente de Trabajadores de Taxis Área Metropolitana, representada legalmente por el señor Manuel Muñoz Rojas, ambos con domiciliado en Cueto N° 144, comuna de Santiago, quien deduce acción de reclamación en contra la Resolución de Multa N° 4175/24/37, de fecha 31 de mayo de 2024, dictada por la Inspección Provincial de Santiago, representada legalmente por el señor Guillermo Reyes Arredondo, ambos domiciliados en Moneda N° 723, comuna de Santiago.

Expone que su parte fue sancionada a dos multas equivalentes a 5 y 4 unidades tributarias mensuales, respectivamente. Las mismas tienen su origen en razón de una fiscalización practicada a su parte debido al reclamo de una ex trabajadora, la señora Luigina Larrea Rueda en el mes de noviembre de 2024, la que fue desvinculada de la empresa.

Las multas estimaron infringido el inciso primero del artículo 55 del Código del Trabajo, en relación al artículo 506 del mismo cuerpo legal, como también los artículos 508, 515 y 516, en relación al artículo 506 del Código del Ramo.

Expone que en la fiscalización realizada en la unidad de Conciliación y Mediación de la Región Metropolitana la fiscalizadora una vez realizada la revisión y especificación de los documentos requeridos, además de proceder obtener fotocopia de ellos, dio cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales, lo que motivó que se dejara constancia por la reclamada de que no había tipificado infracción a la normativa laboral, suscribiendo el acta respectiva, concluyendo la fiscalización con la tranquilidad de no cometer falta alguna.

Refiere que pese a lo expuesto con posterioridad la situación se modificó, aplicando una multa frente a una infracción inexistente, debido que la remuneración del mes de noviembre de 2023 se pagó por transferencia electrónica en tiempo y forma.



Añade, que la trabajadora que motivó la fiscalización se apropió de la suma de \$13.000.000, mediante transferencia electrónica, desde la cuenta corriente de su parte, por lo que se le puso término al contrato el 30 de noviembre de 2024, de lo que da cuenta la denuncia efectuada ante la Policía de Investigaciones de Chile.

Explica que entre los meses de enero a noviembre de 2023 se le transfirió la suma total de \$9.274.000, conforme a los giros indicados en cuadro inserto en el libelo.

Sostiene que, además, realizó sin la autorización del sindicato y las personas a cargo transferencias electrónicas a su propio beneficio, por un total de \$1.710.000 y que en ningún caso corresponde al pago de remuneraciones entre los meses de enero a noviembre de 2023, lo que motivó la interposición de una querrela criminal en su contra por el delito de hurto agravado.

Respecto al no pago de la remuneración del mes de noviembre de 2023, entiende que la misma fue pagada el 6 de noviembre de 2023, según se advierte de la cartola de su parte, pagándosele la suma de \$220.000 y el 8 de noviembre del mismo año un bono por \$60.000, por lo que se dio cumplimiento a la normativa, cumpliendo dentro de plazo a su obligación.

En cuanto a no registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley donde practicar las notificaciones, citaciones y comunicaciones entiende que le causa extrañeza la infracción al ser la única persona contratada por su parte la señora Larrea Ruea, no existiendo otra persona en calidad de trabajador, lo que fue constatado por la fiscalizadora, provocando un daño innecesario e irreparable, pidiendo que se deje sin efecto por no existir más trabajadores.

Previos fundamentos de derecho y citas legales pide que acoja la acción promovida y se deje sin efecto el acto administrativo impugnado; en subsidio, la mismas se rebajen o lo que el tribunal estime pertinente, con costas.

Segundo: Que con fecha 13 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de contestación, conciliación y prueba. La reclamada contestó solicitando el rechazo de la acción promovida. Expone que el acto



administrativo goza de presunción legal de veracidad, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.

Respecto a los argumentos esgrimidos por la parte reclamante, sostiene que no guardan relación alguna con la multa, sino con decisiones de otros tribunales que corren por cuerda separada, efectuándose una fiscalización por el servicio en el que se verificaron las circunstancias contenidas en la multa, lo que motivó que se cursasen las sanciones correspondientes.

En cuanto a la remuneración se paga por mes vencido, por lo que el pago de noviembre corresponde a octubre, sin que conste en el reclamo que se haya pagado en el mes de noviembre. Por otra parte, no se registró correo electrónico.

Se dio por frustrado el llamado a conciliación por la naturaleza infraccional del asunto, fijándose los siguientes hechos pacíficos:

- 1.- Existencia de la resolución de la multa.
- 2.- Contenido de la resolución de multa.

Por su parte, se estableció el siguiente hecho controvertido:

- 1.- Si la reclamada a raíz de la multa cursada incurrió en un error de hecho.
- 2.- Razones que justifican la petición de rebaja de la multa.

Tercero: Que la reclamante incorporó los siguientes elementos de convicción:

Documental.

1.- Copia de la resolución de multa administrativa (S) N°4175/24/37, del 31 de mayo del 2024, de la inspección provincial del trabajo de Santiago.

2.- Descargos realizados ante la inspección del trabajo de Santiago, del 22 de mayo del 2024, respecto de doña LUIGINA LARREA RUEDA.

3.- Copia de la cartola del banco estado, que corresponde a la cuenta corriente del Sindicato De Trabajadores De Taxis De La Región Metropolitana, donde consta el pago de la remuneración del mes de noviembre del año 2023, de la reclamante y ex trabajadora Luigina Larrea Rueda.



4.- Carta de aviso de término de la relación laboral, de la ex trabajadora, de fecha 30 de noviembre del año 2023.

5.- Carta de aviso de término de la relación laboral, ante la inspección del trabajo, de fecha 30 de noviembre del año 2023.

6.- Copia del finiquito del mes de diciembre del año 2023, de la ex trabajadora, en mención.

7.- Copia del certificado de la denuncia, ante la PDI, por el delito de apropiación indebida de dinero, en contra de la ex trabajadora, de fecha 30 de noviembre del 2023.

8.- Copia de la querella criminal, por el delito de apropiación indebida de dinero, ante el 7mo. Juzgado De Garantía De Santiago, RIT. N° 2608-2024.

9.- Copia de la demanda civil, por responsabilidad extracontractual, ante el 27 JDO. Civil De Santiago, ROL N° C- 8945-2024.

Testimonial.

Declaró el señor Pablo Narvaez, el que indicó: que es el secretario de este año, antes solo era miembro, hasta el año 2023 había una trabajadora en el sindicato, la señora Luigina, era secretaria, se desempeñó hasta noviembre, se terminó la relación laboral porque faltaba dinero, habían depósitos a su cuenta personal; a ella se le pagó la remuneración hasta el término de la relación laboral, se hacían por transferencias desde la cuenta del sindicato del Banco del Estado, se le pagó hasta noviembre de 2023; la trabajadora presentó reclamo ante el sindicato porque dijo que no se le pagó el mes de noviembre de 2023, pero se le pagó, la inspección cuando fue no le cursaron la multa, posteriormente si porque no se le había pagado el mes, se juntó la información y se llevó a la inspección del trabajo; no sabe si se cursó otra multa.

Interrogado por el tribunal: tomó conocimiento del pago de la remuneración porque cuando asumió el cargo dirigencial revisó la documentación.

Cuarto: Que, por su parte, la reclamada aportó únicamente prueba instrumental consistente en:

1.- Caratula de Informe de Fiscalización e Informe de Fiscalización



N°1301/2023/5595 redactado por la fiscalizadora Jacqueline Rodríguez R. de fecha 27/05/2024.

2.- Resolución de Multa N°4175/24/37-1-2 de fecha 31/05/2024.

3.- Activación de Fiscalización N°1301/2023/5595 de fecha 04/12/2023.

4.- Consulta Notificación asociada al RUT 65165982-5 que refleja la búsqueda de la información en sistema DTPlus, sin historial de correos de la reclamante.

5.- Contrato de Trabajo de fecha 01/03/2019 entre la trabajadora Luigina Loty Larrea Rueda y la reclamante.

Quinto: Que los hechos pacíficos fijados por el tribunal y la prueba aportada por las partes, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten concluir:

1.- Que con fecha 4 de diciembre de 2023 la señora Luigina Larrea Rueda presentó reclamo administrativo en contra la reclamada en autos, haciendo presente que no se le ha pagado su remuneración y no se le ha hecho entrega de liquidaciones de sueldo, entre otros incumplimientos, lo que se advierte de la solicitud de activación de fiscalización.

2.- Que lo anterior motivó que se iniciara el respectivo procedimiento de fiscalización, llevándose a cabo la visita inspectiva el 17 de mayo de 2024, oportunidad en que en lo pertinente la fiscalizadora constató: que se logró acreditar una transferencia electrónica en el mes de noviembre de 2023 por la suma de \$220.000; que no se acreditó el pago de la remuneración del mes de noviembre de 2023; que el empleador no ha ingresado a la inspección del trabajo correo electrónico que se haya especificado para notificaciones, citaciones o comunicaciones legales, lo que aparece del informe de exposición de antecedentes.

3.- Que la remuneración de la actora estaba compuesto por un sueldo base de \$200.000, más dos percepciones remuneracionales correspondientes a una asignación de colación y movilización por \$50.000 cada una, estableciéndose que el pago del estipendio se haría por mes vencido a más tardar el último día hábil de cada mes, cuestiones que se advierten de la cláusula cuarta y quinto del Contrato de Trabajo.



GXYFXQBPPLH

4.- Que con fecha 31 de mayo de 2024 la reclamante fue sancionada al pago de dos multas equivalentes a 5 y 4 unidades tributarias mensuales, por estimar que el sindicato incurrió en infracción a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 55 en relación al artículo 506, 508, 515 y 516, en relación también al artículo 506, todos del Código Laboral, por no pagar las remuneraciones con la periodicidad estipulada en el contrato, respecto de la trabajadora Luigina Larrea Rueda en el mes de noviembre de 2023, y no registrar el empleador un correo electrónico u otro medio digital definido por ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones, sin que conste que solicitó una forma diversa de notificación, cuestión que aparece del acto administrativo impugnado.

5.- Que la reclamante se califica como una micro empresa, lo que se tendrá por cierto de la carátula de informe de fiscalización, que da cuenta que ésta contaba con un trabajador a la fecha de origen del reclamo.

6.- Que la relación laboral de la señora Larrea concluyó el 30 de noviembre de 2023, lo que se concluye de la carta de término.

Sexto: Que corresponde pronunciarse sobre la acción de reclamación promovida, impugnándose por la empresa la Resolución de Multa N° 4175/24/37, de fecha 31 de mayo de 2024.

El inciso primero del artículo 55 del Código Laboral expresa: “Las remuneraciones se pagarán con la periodicidad estipulada en el contrato, pero los períodos que se convengan no podrán exceder de un mes. En caso que la remuneración del trabajador se componga total o parcialmente de comisiones e independientemente de las condiciones de pago que la empresa pacte con el cliente, aquéllas se entenderán devengadas y deberán ser liquidadas y pagadas conjuntamente con las demás remuneraciones ordinarias del período en que se efectuaron las operaciones u ocurrieron los hechos que les dieron origen, salvo que, por razones técnicas ello no sea posible, caso en el cual deberán ser liquidadas y pagadas conjuntamente con las remuneraciones del mes siguiente. La cláusula que difiera el pago de comisiones al trabajador, infringiendo los límites establecidos en este artículo, se tendrá por no escrita”.

Por otra parte, el artículo 508 del mismo cuerpo legal indica: “Las



notificaciones, citaciones y comunicaciones legales que realice la Dirección del Trabajo se deberán efectuar mediante correo electrónico, sin perjuicio de lo señalado en el inciso siguiente. Para estos efectos, cada empleador, trabajador, organización sindical, director sindical o cualquier otra persona o entidad que se relacione con la Dirección del Trabajo, deberá registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones, el que se considerará vigente para todos los efectos legales mientras no sea modificado en el portal electrónico de la mencionada Dirección. Las notificaciones, citaciones y comunicaciones a través de correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de la emisión del referido correo”.

Finalmente, debe tenerse presente lo previsto en el inciso final del artículo 23 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que expresa: “En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial”.

Séptimo: Que teniendo presente la presunción legal de veracidad de las circunstancias constatadas por la fiscalizadora durante la fiscalización le correspondía a la reclamante desvirtuar los mismos, vale decir que no incurrió en las infracciones que fueron establecidas por la reclamada.

Octavo: Que en lo que dice relación con la infracción a la obligación de pago de las remuneraciones dentro de la periodicidad estipulada en el contrato de trabajo, a juicio del tribunal, la reclamante no aportó prueba idónea alguna que dé cuenta que el estipendio de la actora correspondiente al mes de noviembre de 2023 fue pagado en el plazo dispuesto en la norma infringida. Lo anterior se debe a que para ello se aportó la cartola del banco que registra como supuesto pago de dicho período el día 6 de noviembre, en circunstancias que el contrato de trabajo establece claramente que esta se paga por mes vencido a más tardar el último día hábil del mes y no de manera anticipada, si haberse demostrado una modificación a la modalidad



de pago acordada en la convención, por lo que no es posible sostener que la transferencia efectuada al inicio del mes guarde relación con el pago del período señalado en la resolución de multa. Tampoco el testigo de la empresa da luces de ello, por cuanto manifestó que tomó conocimiento del pago de la remuneración de ese período porque revisó la documentación, lo que implica que revisó necesariamente la cartola que, como se indicó, no es clara o suficiente para estimar que se realizó el pago del período correspondiente a noviembre de 2023.

Luego, no siendo posible concluir que con tales antecedentes se haya desvirtuado lo aseverado en la fiscalización malamente puede atribuirse un error de hecho al respecto.

Noveno: Que respecto a la segunda multa cursada, lo cierto es que tampoco demostró la empresa que al momento de cursarse la sanción haya dado cumplimiento a la obligación de registrar correo electrónico, no siendo exonerante al cumplimiento de dicha disposición legal el hecho que la reclamante haya contado al momento que se presentó la solicitud de activación de fiscalización únicamente con un solo trabajador, ya que la norma infringida impone la obligación de informar un correo electrónico, entre otros, al empleador –no distinguiendo el número de trabajadores que este tiene, bastando dicha calidad, la que tenía precisamente el sindicato en relación a la trabajadora que promovió el reclamo administrativo-, como también a cualquier entidad que se relacione con la Dirección del Trabajo.

Por otra parte, justifica el error de hecho el sindicato arguyendo que no tenía más trabajadoras que aquella que motivó la fiscalización; sin embargo, en el propio informe de exposición de antecedentes se establece que la persona que recibió al fiscalizador en el domicilio de la reclamante durante el procedimiento administrativo respectivo fue la señora Leonor Contreras, quien es administrativa “VTF de la Unión de Trabajadores de Ferrocarriles”, no siendo posible establecer si se trata de una persona que presta servicios o no a la reclamante, para un tercero o de manera conjunta a ambas organizaciones, no explicándose si en el domicilio de la reclamante funcionan o no más personas jurídicas, correspondiendo a la organización sindical despejar tales circunstancia con la finalidad de



establecer la efectividad de sus dichos

Décimo: Que, finalmente, en lo que dice relación con la petición de rebaja de multa, la misma adolece de manifiesta falta de fundamento, toda vez que no se justificó en argumento de hecho o de derecho alguno, sin perjuicio que basta para desestimar el mismo el hecho que las sanciones aplicadas al sindicato se encuentran dentro del rango legal dispuesto en el inciso segundo del artículo 506 del Código Laboral.

Undécimo: Que el resto de la prueba rendida en autos, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, en nada alteran o modifican lo razonado en los considerandos precedentes, siendo irrelevante para efectos de dejar sin efecto la multa o proceder a su rebaja los antecedentes aportados por el sindicato que dicen relación con las circunstancias que motivaron el término de los servicios de la trabajadora, como los acciones civiles o penales iniciadas en su contra, sin perjuicio que no existe, por lo demás, sentencia firme y ejecutoriada que se haya pronunciada al respecto.

Duodécimo: Que no se condena en costas a la reclamante por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones, teniendo, además, en consideración lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes, 446 y siguientes, 496 y siguientes, 503 del Código del Trabajo; artículo 23 del DFL N° 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1967, **se declara:**

I.- Que se rechaza la acción de reclamación promovida por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Taxis Área Metropolitana en contra la Inspección Provincial de Santiago.

II.- Que se condena en costas a la reclamante.

RIT I-480-2024.

RUC 24-4-0586284-7.

Dictada por don Mauricio Guajardo Espinoza, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



GXYFXQBPPLH

A contar del 08 de septiembre de 2024, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>

